



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)**

**REFERENCIA:** SENTENCIA - APELACIÓN  
**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA  
**DEMANDANTE:** LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO  
**DEMANDADO:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES  
COLPENSIONES  
**RADICADO:** 0050013105-005-2018 -00517  
**ACTA N°:** 41

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO** en contra de **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, para pronunciarse en virtud del recuso de apelación del **DEMANDANTE** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 41** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

## **1. ANTECEDENTES**

### **1.1. LA DEMANDA<sup>1</sup>**

El demandante pretende con este proceso: **i) DECLARAR** que tiene derecho a la **pensión de Invalidez** de conformidad con los artículos 39 y 40 de la ley 100 de 1993 (versión original) aplicando la figura de la **condición más beneficiosa**. **ii)** Consecuencialmente, **CONDENAR** a COLPENSIONES a pagar la pensión de invalidez desde el 05 de julio de 2010 incluyendo las mesadas adicionales, los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y subsidiariamente, la indexación

---

<sup>1</sup> Carpeta "01PrimeraInstancia", archivo PDF titulado "01Expediente005201800517, págs. 3 a 17"

de cada una de ellas hasta el momento del pago. **iv)** Lo que *extra y ultra petita* se configure, costas y agencias en derecho.

Para sustentar sus pretensiones afirmó, en síntesis: **i)** Desde el 21 de enero de 1985 se encuentra afiliado al régimen de prima media, cotizando un total de 413 semanas. Fue calificado por Medicina Laboral del ISS hoy COLPENSIONES determinándole una pérdida de capacidad laboral del **64.80%** y como fecha de estructuración el **5 de julio de 2010**. **ii)** Reclamó la pensión de invalidez el **28 de junio de 2011** pero le fue negada por el ISS mediante la Resolución N° 013846 del 17 de mayo de 2012 argumentando no reunir los requisitos del artículo 1° de la ley 860 de 2003. **iii)** El **4 de diciembre de 2017** solicitó nuevamente estudio de la pensión por acreditar los requisitos del artículo 39 de la ley 100 de 1993 en **aplicación del principio de la condición más beneficiosa** de acuerdo con el precedente Constitucional (**T-719/14, T-953/14 y la SU-442 del 18 de agosto de 2016**). **iv)** Debe reconocerse los intereses de mora por el retardo injustificado en el reconocimiento de la pensión, a partir del día en que se causó hasta el día en que se haga el pago efectivo o en subsidio la indexación.

## 2. CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES.<sup>2</sup>

La Administradora de Pensiones se opuso a las pretensiones señalando que si bien el actor cuenta con una PCL superior al 50% no reúne la densidad de semanas consagradas en la Ley 860 de 2003, norma aplicable por haberse estructurado la invalidez en julio de 2010. Afirma que la figura de la condición más beneficiosa no ha sido diseñada para dar cabida a cualquier tipo de situaciones más favorables a los afiliados.

Propuso como excepciones de mérito INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ CON FUNDAMENTO EN EL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN VIGENCIA DE LA LEY 860 DE 2003, PRESCRIPCIÓN, COMPENSACIÓN, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 e IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS.

## 3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **12 de julio de 2019**<sup>3</sup> el Juez Quinto Laboral del Circuito de Medellín decidió: **i)** DECLARAR que bajo los postulados del principio de la condición más beneficiosa, al señor LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO le

<sup>2</sup> "01PrimerInstancia", archivo PDF titulado "01Expediente005201800517, págs. 38 a 40"

<sup>3</sup> "01PrimerInstancia - archivo PDF titulado "01Expediente005201800517, págs. 57 a 59" y "05AudienciaCompleta005201800517"

asiste el derecho al reconocimiento y pago de la Pensión por Invalidez que consagra la ley 100 de 1993, en cuantía del smlmv y por 14 mesadas. **ii)** CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar al demandante la suma de **\$46'289.908** por retroactivo pensional liquidado entre el 04 de diciembre de 2014 y el 30 de junio de 2019, suma que deberá cancelarse debidamente **indexada** y sobre la que se **autoriza** descontar los aportes para el Sistema General de Salud. **iii)** CONDENAR a COLPENSIONES a seguir reconociendo y pagando al actor, a partir del **01 de julio de 2019**, la suma de **\$828.116**, por concepto de mesada pensional. **iv)** DECLARAR probadas las excepciones de “prescripción” sobre las mesadas causadas entre el 05 de julio de 2010 y el 03 de diciembre de 2014, inclusive e “inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora” e imprósperos los demás medios exceptivos. **v)** CONDENÓ en costas a COLPENSIONES e incluyó como agencias en derecho la suma de \$2'314.495.

#### 4. RECURSO DEL DEMANDANTE

La apoderada de la parte demandante solicita se **revoque de manera parcial** la sentencia en cuanto a los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, argumentando que con ellos se busca sancionar la conducta pasiva y negligente de la entidad obligada a responder una prestación de carácter económico, siendo la manera que el legislador garantiza que el ente administrador se disponga a resolver oportunamente las solicitudes de sus afiliados una vez se encuentren cumplidos los requisitos y se encuentre consolidado el derecho. Adujo qué en este caso, COLPENSIONES no reconoce la prestación con fundamento en que el afiliado no alcanzó a cumplir con el requisito establecido en el art. 1° de la ley 860 de 2003 al no acreditar las 50 semanas anteriores a la estructuración de su invalidez; sin que fuera dable sustraerse de la obligación de reconocer la pensión bajo el principio de la **“condición más beneficiosa”** pues casos como el que aquí se analiza han sido resueltos jurisprudencialmente, siendo procedente a la entidad accionada resolver las solicitudes pensionales no solo con arreglo a la ley sino también a la jurisprudencia, cuando la misma ha sido reiterada bajo un punto de derecho.

#### 5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>4</sup>, las partes intervinieron oportunamente así:

<sup>4</sup> Carpeta denominada “02SegundaInstancia”, archivo PDF titulado “07AutoAdmiteCorreTraslado005201800517” 08AlegatosColpensiones005201800517

5.1. ALEGATOS DE COLPENSIONES<sup>5</sup>

La Administradora del Régimen de Prima Media intervino solicitando se **revoque** la decisión de primera instancia señalando que: **i)** Debe cumplirse con el requisito de acceso a la pensión consistente en haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores al momento de la invalidez según el artículo 1º de la Ley 860 de 2003. **ii)** Aplicar requisitos de normas anteriores es atentar en contra de la seguridad jurídica y la sostenibilidad financiera del sistema pensional. A pesar de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, permiten la aplicación de una norma anterior, es menester tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, sostiene la tesis de solo aplicar el régimen inmediatamente anterior, lo que resulta menos desproporcionado. **iii)** Acota que el último régimen de transición introducido (Ley 100, 1993, Art. 36) en su versión original conservaba los requisitos de la pensión de vejez para las personas que durante la entrada en vigencia de la citada ley tenían cumplida una edad determinada o habían acumulado cierto número de semanas o tiempo de servicio; pero, esta transición quedó consagrada únicamente para la pensión de vejez, más no para las de invalidez y sobrevivientes.

5.2. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE<sup>6</sup>

La apoderada de la parte demandante reitera la inconformidad respecto a la absolución de los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, insistiendo en que debieron ser reconocidos.

Pues bien, se ha proferido una **DECISIÓN CONDENATORIA** que se revisará en grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES y por las materias objeto del recurso de APELACIÓN de la parte demandante. Así, el análisis en esta instancia debe hacerse en el siguiente orden lógico: **i)** En primer lugar, se analizará el derecho pensional del señor LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO a la luz de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003 y se abordará el principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de invalidez en el tránsito legislativo de Ley 860 de 2003 a Ley 100 de 1993 con la diversidad de criterios entre las cortes. Para verificar en el caso concreto si en este caso resulta procedente CONFIRMAR la condena al reconocimiento de la pensión de invalidez a favor del señor RODRÍGUEZ MAZO. **ii)** En segundo término, se analizará si resulta procedente la condena a intereses moratorios conforme lo solicita la recurrente

<sup>5</sup>	Carpeta	"02SegundaInstancia",	archivo	PDF	titulado
		"08AlegatosColpensiones005201800517"			
<sup>6</sup>	Carpeta	"02SegundaInstancia",	archivo	PDF	titulado
		"10AlegatosDemandante005201800517"			

## 6. REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE INVALIDEZ EN VIGENCIA DE LEY 860 DE 2003

### 6.1. EL REQUISITO DE SEMANAS - APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA – DIVERSIDAD DE CRITERIOS ENTRE LAS ALTAS CORTES

De conformidad con el precedente pacífico y reiterado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en materia de **pensión de invalidez**, la norma aplicable en principio, es la vigente a la fecha de estructuración, criterio expuesto, entre muchas otras, en las sentencias **SL2358-2017**, **SL1018-2020**, **SL2020-2020** y **SL1362-2022**.

De manera particular, el **artículo 39 de la Ley 100 de 1993** consagró en relación con el requisito de semanas que debe acreditar el afiliado para la pensión de invalidez:

ARTÍCULO 39. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan **alguno** de los siguientes requisitos:

**a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.**

b. Qué habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez. Negritas intencionales)

A su turno, el **artículo 1 de la Ley 860 de 2003**, que entró en vigor el **29 de diciembre de 2003**<sup>7</sup>, consagró los requisitos para acceder a la pensión de invalidez:

**Artículo 39.** Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración ~~y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.~~

2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, ~~y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.~~<sup>8</sup>

Ahora bien, sin perjuicio de la regla general relacionada con que la norma aplicable es la vigente al momento de suceder la contingencia, en virtud de lo

<sup>7</sup> De conformidad con el art. 5 de dicha Ley, publicada en el Diario Oficial No. 45.415.

<sup>8</sup> Los numerales 1 y 2 consagraron el denominado requisito de **fidelidad**, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia **C-428/09 del 1 de julio de 2009**.

establecido en el **artículo 53 de la Constitución Política** en consonancia con el **artículo 272 de la Ley 100 de 1993**<sup>9</sup>, se ha consagrado el principio del derecho laboral de la **condición más beneficiosa** derivado del principio de favorabilidad en sentido amplio.

En relación con el alcance de este principio, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia<sup>10</sup> y la Corte Constitucional<sup>11</sup> **coinciden en varios aspectos**, concretamente: **i)** Opera ante la existencia de un **tránsito legislativo** que implica la exigencia de unos requisitos más gravosos para el afiliado, es decir, dando así prevalencia a otros principios y necesidades sobre el principio de **progresividad**; **ii)** Protege a una población que tiene una **expectativa legítima**, pues se encuentra en una situación jurídica concreta, consistente en la satisfacción de las semanas mínimas que exige la norma derogada para acceder a la prestación que cubre la contingencia respectiva; **iii)** Para la protección de esas expectativas legítimas **no se ha consagrado un régimen de transición**. No obstante, existe diversidad de criterios entre las Altas Cortes en relación la aplicación de este principio, para los casos en qué la contingencia se presenta en vigencia de la Ley 860 de 2003 y se pretende la aplicación de la Ley 100 de 1993. Veamos:

#### **6.1.1. LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Inicialmente, la Alta Corporación **negó** la posibilidad de acudir a este principio para este tránsito legislativo, sosteniendo que únicamente era posible la aplicación de la norma vigente al momento de materializarse el riesgo. Este criterio se evidencia en sentencias como la del **20 de febrero de 2008 – Rad. 32649**<sup>12</sup>.

En la sentencia del **25 de julio de 2012 - Rad. 38674**<sup>13</sup>, cambió el criterio del órgano de cierre y se estableció como sub regla para aplicar el **artículo 39 de la Ley 100 de 1993** a los casos en que la invalidez se hubiere estructurado en vigencia de la **Ley 860 de 2003**, que el afiliado debía haber cotizado **26 semanas** entre el **26 de diciembre de 2002 y el 26 de diciembre de 2003**, fecha de promulgación de la Ley 860 de 2003. Este criterio fue reiterado en diversas

<sup>9</sup> “El sistema Integral de Seguridad Social establecido en la presente ley, no tendrá, en ningún caso, aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad o los derechos de los trabajadores. En tal sentido, los principios mínimos fundamentales consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia”

<sup>10</sup> Radicado 42395 del 28 de agosto de 2012, SL7358-2014 - Radicación n.º 46780 del 11 de junio de 2014, STL9394-2015 - Radicación n.º 40552 del 15 de julio de 2015, SL 2358-2017 – Radicación n.º 44596 del 25 de enero de 2017, SL 4650-2017 – Radicación n.º 45262 del 25 de enero de 2017.

<sup>11</sup> T-730-2014, T-569 de 2015, T-235 de 2017, T-084 de 2017, SU-005 de 2018, T-082 de 2018, T-026 de 2019 y T-024 de 2019.

<sup>12</sup> MP LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ.

<sup>13</sup> MP LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS Y CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE



sentencias, como las del **28 de agosto de 2012 – Rad. 42395, SL7358-2014 del 11 de junio<sup>14</sup>** y **STL9394-2015 del 15 de julio<sup>15</sup>**. Sin embargo, a partir de las sentencias proferidas el 25 de enero de 2017 -**SL 2358-2017 del 2017** y **SL4650-2017<sup>-16</sup>** la Alta Corporación introdujo nuevas sub reglas y condiciones de aplicación que aún hoy se mantienen<sup>17</sup>:

- Se introdujo un límite temporal consistente en que la contingencia ha debido ocurrir **dentro de los tres (3) años siguientes** a la entrada en vigor de la nueva Ley. Es decir, entre el **29 de diciembre de 2003 y el 29 de diciembre de 2006**.
- Solo en el evento de cumplirse con este requisito, habrá de analizarse si el causante era **cotizante activo** o **inactivo**.
- Si era **cotizante activo** debió haber cotizado veintiséis (26) semanas en cualquier tiempo, antes del 29 de diciembre de 2003, esto es, en vigencia de Ley 100 de 1993.
- Si era **cotizante inactivo** debió haber cotizado veintiséis (26) semanas entre el **29 de diciembre de 2002 y 29 de diciembre de 2003**, esto es, dentro del año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003.

Para fundamentar este último cambio, la Corte: **i)** Aseveró que la condición más beneficiosa es un mecanismo **excepcional** cuya aplicación necesariamente es restringida y temporal; **ii)** Así, al analizar la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, se concluyó que el legislador jamás pretendió perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 que regulan las pensiones de invalidez y sobrevivientes, por lo que la condición más beneficiosa no puede llevar a mantener, por los siglos de los siglos, la protección de «“derechos” que no son derechos”», en contraposición de la nueva ley que ha sido proferida honrando la Constitución Política; **iii)** Argumentó que el lapso de 3 años, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de diciembre de 2006 para la aplicación excepcional de la condición más beneficiosa, es el tiempo que la nueva normativa -Ley 797 de 2003 o Ley 860 de 2003- dispuso como necesario para que los afiliados al sistema de pensiones reúnan la densidad de semanas de cotización exigida -50 semanas-; **iv)** Con esta posición se garantiza y protege de forma interina pero suficiente, la cobertura al Sistema General de Seguridad Social frente a la contingencia de la invalidez o la muerte.

### 6.1.2. EL PRECEDENTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

<sup>14</sup> Rad. 46780

<sup>15</sup> Rad. 40552

<sup>16</sup> Rad. 44596. MP FERNANDO CASTILLO CADENA.

<sup>17</sup> **SL3488-2018 - SL3648-2021**

En las sentencias **T-730 de 2014** y **T-569 de 2015** la Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes y otra de invalidez, respectivamente, aplicando el principio de la condición más beneficiosa en el tránsito legislativo de Ley 100 de 1993 a Ley 797 u 860 de 2003, concluyéndose en ambas providencias que, al ser el causante o afiliado **cotizante activo**, debían exigírsele únicamente **26 semanas** de cotización.

Esta Corporación **no ha fijado ningún límite temporal** o “**zona de paso**” frente a la fecha de ocurrencia de la contingencia. Así se desprende entre otras, de las sentencias **T-730 de 2014**<sup>18</sup>; **T-401**<sup>19</sup>, **T-569 de 2015**<sup>20</sup>; **T-464**<sup>21</sup> y **T-137 de 2016**<sup>22</sup>; **T-084**<sup>23</sup>, **T-235**<sup>24</sup>, **T-294**<sup>25</sup> y **T-378**<sup>26</sup>, de 2017; y **T-082 de 2018**<sup>27</sup>, referidas a casos en los que las contingencias ocurrieron después de los 3 años del tránsito legislativo.

Además, debe señalarse que tal y como se determinó en la sentencia **SU-442 de 2016** y posteriormente en la **SU-556 de 2019**, en la que se dio alcance a la primera en relación con la aplicación ultra-activa del Decreto 758 de 1990 a casos que inicialmente deben resolverse con la Ley 860 de 2003; se resalta que el principio de la condición más beneficiosa tiene un componente **constitucional**. Así es que, en efecto, este principio se ha establecido para proteger una **verdadera expectativa legítima** debe haberse cumplido con el requisito de semanas fijadas en la norma anterior, durante su vigencia. De lo contrario, el principio de la condición más beneficiosa no estaría llamado a operar, pues si no se sufragaron las cotizaciones necesarias en la vigencia de esa norma anterior no habría expectativa alguna que proteger, sino simplemente un tránsito legislativo que en manera alguna pudo afectar al afiliado y a los beneficiarios.

El precedente de la Corte Constitucional ha sido acogido por esta Sala de Decisión en diferentes oportunidades, apartándose de manera respetuosa de la jurisprudencia que sobre el mismo tema ha desarrollado la Sala Laboral de la

<sup>18</sup> La muerte del causante sucedió el **23 de mayo de 2010** y se reconoció la pensión de sobrevivientes aplicando la Ley 100 de 1993 en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

<sup>19</sup> El causante falleció el **4 de febrero de 2006**.

<sup>20</sup> La invalidez se estructuró el **12 de diciembre de 2013** y se ordenó el reconocimiento de la pensión.

<sup>21</sup> El causante murió el **15 de noviembre de 2009**.

<sup>22</sup> La enfermedad se estructuró el **7 de julio de 2014**.

<sup>23</sup> El causante falleció el **29 de agosto de 2014**.

<sup>24</sup> El causante falleció el **20 de septiembre de 2006**.

<sup>25</sup> El causante murió el **15 de mayo de 2014**.

<sup>26</sup> El causante falleció el **29 de junio de 2011**.

<sup>27</sup> La muerte del causante sucedió el **4 de julio de 2010**, esto es, en vigencia de Ley 797 de 2003. La Corte analizó la posibilidad de aplicar la Ley 100 de 1993, **sin hacer referencia a ninguna limitación temporal**, considerando: *No cumplió con el requisito de semanas de cotización necesarias para adquirir la pensión de sobreviviente, de conformidad con esta normativa (50 semanas en los últimos 3 años de vida). De igual manera, tampoco cumplió el requisito de semanas de cotización de la Ley 100 de 1993 (26 semanas de cotización en el año anterior a la muerte). En consecuencia, no tendría, en principio, derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.*



Corte Suprema de Justicia, por considerar que la fijación de tal zona de paso genera una limitación injustificada a la aplicación de un principio de orden constitucional (artículo 53 de la Constitución Política) sin que pueda afirmarse la afectación de la sostenibilidad financiera del sistema, porque el afiliado ha sufragado bajo su vigencia, la densidad de semanas exigida en los artículos 39 y 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación que se introdujera por los artículos 1 de la Ley 860 y artículo 12 Ley 797, respectivamente; de los que ni siquiera puede afirmarse que constituyan en rigor, un tránsito legislativo.

## 6.2. CASO CONCRETO

El Juez de primera instancia para tomar la decisión de fondo se apoyó en las Sentencias con Radicados 38674 del 25 de junio de 2012, 45815 del 2013, 35920 del 2014, 53327 del 2015, 49070 2016, 45252 del 2017 y la SL668 del 2018 en concordancia con lo decidido en la SU442 del 18 de agosto de 2016 y efectuó la valoración del acervo probatorio, efectuando los siguientes razonamientos: **i)** En primer lugar, revisó las historias laborales del actor para verificar que respecto al señor LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO que si bien no acredita semana de cotización alguna durante los tres últimos años anteriores a la **FE (05 de julio de 2010)**, cotizó 361,71 semanas antes del 29 de diciembre de 2003 y 363 semanas antes del 5 de julio de 2010. **ii)** Concluyó así que para la fecha en que se surtió el cambio normativo, el afiliado había cotizado la densidad de semanas que exigía el régimen pensional de Ley 100 acreditando la expectativa legítima de pensionarse bajo tal normativa. **iii)** El señor RODRÍGUEZ MAZO tiene derecho a la pensión de invalidez por contar con una PCL superior al 50% y porque acredita haber cotizado más de 26 semanas cuando entró en vigencia la ley 860 de 2003, al ser cotizante activo para el **05 de julio de 2010** cuando se estructuró su invalidez.

Pues bien, a partir del análisis efectuado *in extenso* en el **acápito 6.1.2.** la Sala comparte el análisis y decisión adoptada en la providencia que se revisa, debiendo destacar además que en la documental se observa **dictamen** de pérdida de capacidad laboral realizado por Medicina Laboral del ISS hoy Colpensiones<sup>28</sup> con número 2080 del 22 de marzo de 2011 en el cual se determina que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del **64,80%**, estructurada el **05 de julio de 2010**, de **origen común**.

<sup>28</sup> Carpeta denominada "01PrimeraInstancia", archivo PDF titulado "01Expediente005201800517, págs. 19 a 20"

COLPENSIONES denegó el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada, argumentando que **LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO** solo cuenta con “0” **semanas** cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración, por lo que, no acredita la densidad de semanas consagrada en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, norma vigente para el momento en que se estructuró la invalidez.

Pero tal como se pregonó desde los hechos de la demanda, en este caso resulta aplicable el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, establecido para proteger una **verdadera expectativa legítima** del demandante, al haber cumplido con el requisito de semanas fijadas en esta disposición durante su vigencia. En efecto, si bien el señor **RODRÍGUEZ MAZO** no acredita los requisitos consagrados en la Ley vigente al momento de la estructuración de la invalidez, sin embargo, resulta procedente aplicar en su caso la Ley inmediatamente anterior, a pesar de que la fecha de estructuración hubiese ocurrido después de los 3 años de haber entrado en vigencia la Ley 860 de 2003; pues en criterio de esta Corporación y conforme el precedente constitucional reiterado, esta posibilidad no se encuentra sujeta a límite temporal alguno en relación con la fecha de ocurrencia de la contingencia<sup>29</sup>.

De acuerdo con la historia laboral expedida por Colpensiones el **31 de agosto de 2018** <sup>30</sup>, **LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO** cotizó una densidad de semanas superior a las **406,29** que se reportan en la historia, en la que se evidencian los meses de octubre a diciembre de 1998 y febrero a mayo de 1999, en los que habiéndose cotizado 30 días, sin justificación alguna la entidad los reporta en “0”. De ese gran total de semanas, muchas más de **273,42** se aportaron en vigencia de la Ley 100 de 1993, entre el **1 de abril de 1994** y el **26 de diciembre de 2003**, fecha en que inició la vigencia de la **Ley 860 de 2003**.

Y si lo anterior fuera poco, para el **05 de julio de 2010**, fecha en que se estructuró la invalidez, el demandante era cotizante **activo** en el sistema general de pensiones a través del empleador EXPLANAN SA, superando con creces el requisito de 26 semanas que exige el **literal a) artículo 39 de la Ley 100 de 1993**.

### 6.3. PRESCRIPCIÓN y ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA

<sup>29</sup> T-730 de 2014; T-401, T-569 de 2015; T-464 y T-137 de 2016; T-084, T-235, T-294 y T-378 de 2017; y T-082 de 2018

<sup>30</sup> “01PrimerInstancia”, archivo PDF titulado “01Expediente005201800517, págs. 38 a 40”

El Juez condenó al reconocimiento de la pensión por una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, declarando la causación del derecho desde el **05 de julio de 2010** pero **probada parcialmente la excepción de prescripción** de los derechos causados y exigibles con **anterioridad al 04 de diciembre de 2014**.

Revisado el expediente se observa que el actor presentó reclamación el **4 de diciembre de 2017** titulado “NUEVO ESTUDIO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ”<sup>31</sup> fecha en la que interrumpió la prescripción, de manera que en este caso han prescrito las mesadas causadas con antelación al **4 de diciembre de 2014**, como acertadamente se concluye en la providencia que se revisa.

Se actualizará así el retroactivo, calculado con el valor de la mesada equivalente al salario mínimo legal vigente y **14** mesadas anuales al causarse el derecho en **julio de 2010** - siendo inferior a 3 salarios mínimos - en los términos definidos en el AL 1 de 2005, tal como fue dispuesto en la sentencia que se revisa. Así, el valor entre el **04 de diciembre de 2014** y el **30 de junio de 2022** asciende a la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS (\$84´095.312)**, conforme al siguiente detalle:

RETROACTIVO PENSIONAL Rad 005 2018 00517					
Año	IPC	# mesadas		Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2014	3,66%	0,9		\$ 616.000	\$ 554.400
2015	6,77%	14		\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	5,75%	14		\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14		\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14		\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14		\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14		\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14		\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022		7		\$ 1.000.000	\$ 7.000.000
TOTAL					\$ 84.095.312

**COLPENSIONES** continuará pagando al señor **LEONCIO DE JESÚS RODRÍGUEZ MAZO** la mesada pensional equivalente al salario mínimo de cada anualidad a partir del **1 de julio de 2022** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993** y con **14 mesadas anuales**. Y descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, el que opera por mandato legal y **sin necesidad de declaración judicial**, como lo ha expuesto la Sala Laboral de la

<sup>31</sup> Carpeta denominada “01PrimerInstancia”, archivo PDF titulado “01Expediente005201800517, **págs. 27 a 30**”

Corte Suprema de Justicia en sentencias como la **SL 1169 de 2019 – Rad 64.490 del 10 de abril** y la **SL1019-2020 del 12 de febrero**.

#### 6.4. INTERESES MORATORIOS Y/O INDEXACIÓN

La parte demandante apela en cuanto a la absolución impartida por este concepto, pero la Sala no comparte su planteamiento, por lo siguiente. Respecto a la procedencia de estos intereses en caso de retardo en el reconocimiento de la prestación, la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema ha sido pacífica y reitera la doctrina referida a que se generan por **el retardo en el pago de las mesadas pensionales**, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional. Este criterio se ha plasmado en sentencias como la **SL2941-2016**.

Pero no puede perderse de vista que esa misma Corporación ha consolidado su precedente en sentencias como la **SL16390-2015, SL552-2018 y SL1019-2020 del 12 de febrero**, referido a unos casos precisos y excepcionales en los que no resulta procedente la condena a estos intereses, circunscribiéndose a aquellos eventos la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación en el proceso obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podía prever, sin que pueda advertirse un actuar arbitrario o caprichoso.

En este caso los intereses no son procedentes, porque cuando COLPENSIONES negó el reconocimiento de la pensión de invalidez lo hizo con apego minucioso a la norma aplicable en principio. La posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para la fecha de la reclamación inicial de la prestación económica 28 de junio de 2011<sup>32</sup> era clara en cuanto a que no era viable acudir de la Ley 860 de 2003 a la Ley 100 de 1993 en virtud del principio de la condición más beneficiosa, tesis que solo cambió a partir de la sentencia **25 de julio de 2012 - Rad. 38674**<sup>33</sup>. Adicional a lo anterior, la postura del órgano de cierre cambió nuevamente en el año **2017** en la que se introdujo la limitación de la “zona de paso”.

<sup>32</sup> Carpeta denominada “01PrimeraInstancia”, archivo PDF titulado “01Expediente005201800517, **págs. 25 a 26**”

<sup>33</sup> MP LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS Y CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE

En cuanto a la **condena** por la **indexación** del retroactivo pensional reconocido, pretensión que fue solicitada de manera subsidiaria ante el no reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, también se CONFIRMA en este aspecto la providencia porque las mesadas reconocidas y no pagadas en su oportunidad legal se encuentran afectadas por la devaluación de la moneda, derivada de una economía inflacionaria como la nuestra, siendo claro que esta condena no implica el incremento del valor del crédito, ya que su función consiste únicamente en evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente reducción del patrimonio de quien accede a la administración de justicia, causada por el transcurso del tiempo. Tampoco puede verse como una sanción, ya que lejos de castigar al deudor, lo que garantiza es que éste crédito no pierda su valor real. Así, se impone proferir una condena que ponga al demandante en la situación más cercana al supuesto en que se hallaría de no haberse producido el menoscabo, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 según el cual “dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. Y la forma en que aquello se garantiza en el marco de la protección especial de los derechos laborales y de la seguridad social, es a través de la indexación como consecuencia de la incontenible depreciación de la moneda **(SL 359 -2021)**.

## 7. SOBRE LAS COSTAS

Al no salir avante el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte DEMANDANTE, se causan COSTAS en la segunda instancia. El valor de las agencias en derecho es el equivalente a **1/2** salario mínimo legal mensual vigente.

## 8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

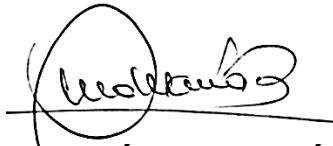
**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juez Quinto Laboral del Circuito de Medellín, **actualizando** el retroactivo pensional causado entre el **04 de diciembre de 2014** y el **30 de junio de 2022** que asciende a la suma de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS**

**(\$84'095.312).** Así, COLPENSIONES continuará pagando una mesada pensional a partir del **1 de julio de 2022** equivalente a **UN MILLÓN DE PESOS (\$1.000.000)** que será reajustada anualmente en los términos del **artículo 14 de la Ley 100 de 1993**, con **14 mesadas al año**, mientras persista su estado de invalidez.

**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo del DEMANDANTE. El valor de las agencias en derecho es el equivalente a ½ salario mínimo legal vigente.

Lo anterior se notifica por **EDICTO**, vencido el término de notificación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. Se da por terminada la audiencia y se firma en constancia por quien en ella intervinieron.

**Los Magistrados,**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**  
**SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA**





RADICADO: 05001 31 05 – 005 – 2018 - 00517

SENTENCIA del //17/06/2022

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,  
**para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**

Enlace en caso de no tener lector QR: [https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/Ev7ouKIZnTBHqUyUpLNuNyYBxv93Gv97oc00BfLkzSa8sA?e=V1ggy5](https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des06sltsmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Ev7ouKIZnTBHqUyUpLNuNyYBxv93Gv97oc00BfLkzSa8sA?e=V1ggy5)